

Paulo César Juárez Segura

VS

**Consejo General del Instituto Nacional
Electoral**

TESIS II/2025

ACCIONES AFIRMATIVAS. LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA ACREDITAR UNA DISCAPACIDAD DEBEN SER RESGUARDADOS POR ÉSTA, SALVO QUE SE HAYA RECABADO EL CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA PUBLICITARLOS.

Hechos: Diversas personas impugnaron acuerdos de las autoridades administrativas electorales relacionados con la implementación de acciones afirmativas para personas con discapacidad, porque cuestionaron la falta de información sobre su acreditación.

Criterio jurídico: Los elementos de prueba que presenten las personas para acreditar su discapacidad constituyen información que corresponde a su vida privada la cual debe ser resguardada por las autoridades, por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, ya que se deben proteger los datos de carácter sensible, como lo son el tipo de discapacidad, debido a que atañen a aspectos íntimos de la persona, sin que sea necesario publicitarlos, salvo que exista un consentimiento expreso y por escrito de su titular.

Justificación: Conforme a lo establecido en el **artículo 22 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**, las personas no deben ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación por su discapacidad. De esta manera, de una interpretación al **artículo 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, se obtiene que las autoridades tienen la obligación de proteger la información que se refiera a la vida privada y los datos personales de las personas; por tanto, si una persona con discapacidad

decide participar en un proceso electoral mediante una candidatura en la modalidad de una acción afirmativa, debe proporcionar los elementos de prueba para acreditar la discapacidad a la autoridad correspondiente, sin que ello vulnere la protección de sus datos personales, ya que la autoridad administrativa electoral tiene el deber de proteger la información personal relativa al estado de salud, como es el tipo de discapacidad; por lo que, no podrá publicitarse, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito de la persona titular.

Séptima Época

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-924/2021.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-584/2021 y acumulados.